La universidad conservadora.

A propósito de un artículo de Ferrer y Bolon sobre la extensión universitaria

Antonio Romano y Agustín Cano

En su artículo “Extensionismo, asistencialismo, amortiguación”¹, Walter Ferrer y Alma Bolon se refieren a la política de extensión universitaria desarrollada por la Universidad de la República (UdelaR) en el período [2006-2014](#). Ya desde el título, ubican a dicha política extensionista en una relación de equivalencia con el asistencialismo y la amortiguación social. Pero si esto no fuera suficiente, también declaran la interpretación “parcial” y “reduccionista” de la política universitaria a la que se refieren como “la autodenominada Segunda Reforma Universitaria”. Sin entrar en consideraciones acerca del sentido que expresa la inclusión del carácter autodenominado que la política implementada se atribuye, un primer aspecto resalta si se compara la política universitaria actual con la anterior a la que se critica. Esta característica podría identificarse con una suerte de “antireformismo” o “voluntad de freno” que continua al impulso reformista que se activó luego de la Segunda Reforma. Las políticas universitarias implementadas durante el rectorado de Arocena -las cuales son más importantes de analizar que el nombre que se autoatribuye- despertó la resistencia en importantes grupos universitarios -principalmente grados superiores- que a partir de una nueva definición de la docencia universitaria, debían ser evaluados ya no solo a partir de su producción científica sino también de las tareas de extensión que estos hubieran realizado. Esta propuesta pretendió reflejar, justamente, la relación inescindible e interdependiente del trabajo universitario a la cuál hacen referencia los autores, quienes confunden interdependencia con “todo es lo mismo” (“se enseña investigando, se investiga enseñando, se relaciona con el medio enseñando e investigando”), pero donde la especificidad de cada función se diluye, casualmente, en dos de las funciones: la enseñanza y la investigación. Frente a la modificación de los criterios de evaluación de la actividad de los docentes universitarios, que ahora también pretendía incluir a la extensión como una función relevante, muchos pusieron el grito en el cielo. Por esto el programa impulsado por el actual rector de la UdelaR en la campaña electoral bajo el título “Hacia un nuevo equilibrio” no tienen otra forma de referirse a la política universitaria más que en términos de desarticulación de lo que se propuso. No tiene otro contenido más que la supuesta interpretación de una tradición que siempre existió y que se habría pretendido desarticular. Todo lo contrario: la política actual solo puede desarticular porque no tiene ningún contenido particular para ofrecer a esa tradición. Y esto queda en evidencia en el primer párrafo del texto de Bolón y Ferrer, donde lo único que pueden hacer es remitir a lo que ya existía como único argumento en favor de su posición. Esto se llama de una manera bastante simple: conservadurismo.

Volvamos ahora al título y la segunda parte del artículo que es la medular. La falta de argumentos que expliquen el pasaje de un término a otro de la equivalencia “extensionismo = asistencialismo = amortiguación”, obliga a detenernos un momento en observar el peculiar mecanismo de razonamiento utilizado por los autores. No sin ironía, el mecanismo de argumentación que Ferrer y Bolon eligen para intentar dotar de verosimilitud a su diatriba anti-extensionista es el que Arthur Schopenhauer denomina, precisamente, “extensión”². Esta “estrategema”, la primera de las 37 descritas por el filósofo alemán en su “dialéctica erística”, consiste en extralimitar el objeto que se pretende criticar, “estirándolo” al punto de desvirtuarlo completamente, de modo de poder hacerlo encajar en una crítica general a la proposición estirada. En este caso, el ensayo resulta bastante tosco. Veamos: en América Latina suceden procesos de control político por vía del asistencialismo como los que Stolowicz describe en torno a la “vocación social” del “posneoliberalismo” en tanto “lubricante” para la “transformación conservadora de la sociedad”³. A partir de estirar sin pudor esta premisa, Ferrer y Bolon concluyen que la política extensionista de la UdelaR en el período reciente no fue otra cosa que un aceitado dispositivo de amortiguación social, a través del cual la Universidad se sumó a la poderosa maquinaria estatal de neutralización asistencialista del conflicto social. Si se aplicara el mismo razonamiento en otros ejemplos se lograrían resultados igualmente absurdos. En el desarrollo de la tecnología bélica trabajan matemáticos, ergo los matemáticos de la Facultad de Ciencia de la UdelaR son funcionarios de la industria armamentista. Parte de la literatura europea aportó justificación a las invasiones coloniales, luego, los profesores de Facultad de Humanidades que se ocupan de la literatura europea son colonialistas.

Es comprensible que el camino elegido por los autores para intentar una crítica “por izquierda” a la política extensionista de los últimos años omita cualquier referencia específica a alguno de los programas u orientaciones de dicha política. En efecto, no recurren a ningún ejemplo concreto que pueda ilustrar el tal carácter “amortiguador”, y evitan en cambio cualquier intento de mediación explicativa entre la premisa general estirada y la conclusión disparatada. Es que: ¿en base a qué fundamentos se podría sostener tamaño dislate? Ciertamente no en la política extensionista que se cuestiona, la cual, más allá de sus aciertos y errores, ha tenido una inequívoca orientación crítica. Para fundamentar esta afirmación concurren todos los ejemplos que le faltan a Ferrer y Bolon para sostener la suya.

No son demasiados los investigadores universitarios que desde diferentes ramas de conocimiento aportan hoy al pensamiento crítico con vocación superadora de los límites del neodesarrollismo capitalista hegemónico. Pero tampoco son pocos. Están por toda la Universidad, en diferentes facultades y áreas de conocimiento. Varios de ellos están en Extensión. Investigan sobre las consecuencias sociales, ecológicas y productivas del modelo de agronegocio dominante; sobre las

condiciones de trabajo de los trabajadores de la industria pesquera; sobre las consecuencias sociales y urbanas de los barrios privados; sobre las memorias barriales respecto a las luchas sociales pasadas; sobre las políticas económicas alternativas necesarias para acrecentar el presupuesto educativo; sobre las políticas energéticas y la actual distribución desigual de sus costos entre la población; sobre las implicaciones del proyecto agro-industrial del norte del país y el lugar que en ellos le cabe a los trabajadores; sobre las cooperativas de vivienda; sobre las condiciones de vida y trabajo de los clasificadores de residuos urbanos sólidos; sobre la comunicación en las organizaciones sindicales; sobre los desafíos de la autogestión en las organizaciones sociales; sobre agro-ecología, cooperativismo, feminismo y sindicalismo. Estos y otros temas y problemáticas son objeto de proyectos de investigación que, en todos los casos, resultan en colaboraciones con organizaciones sociales populares, comunidades barriales, organizaciones sindicales o cooperativas. Para enterarse de las temáticas abordadas por estos proyectos se puede consultar los registros de la CSIC⁴. Para conocer los alcances de sus resultados se puede acudir a las organizaciones sociales participantes.

Y así se podrían enumerar muchos ejemplos de una política que, más allá de sus virtudes y defectos, ha procurado que la Universidad, a través del ejercicio integrado de sus funciones, recree su sentido crítico y su compromiso social. Lo ha hecho, además, en explícita confrontación con los modelos extensionistas propios de la ideología neoconservadora del “posneoliberalismo” amortiguador. Así por ejemplo, ante un requerimiento recibido en 2008, la CSEAM⁵ adoptó la definición institucional de no trabajar con la organización “Un techo por mi país”, en el marco de una orientación general de diferenciarse de las concepciones e intereses del voluntariado empresarial.

Por lo demás, un camino corto para dilucidar la orientación política de cualquier institución cultural consiste sin dudas detenerse en su política editorial. Retomando una de las vetas históricas de la tradición extensionista latinoamericana, en el período [2006-2014](#) Extensión Universitaria generó un Sello Editorial y una publicación de pensamiento crítico, la Revista Contrapunto. Los libros del Sello y los números de la Revista se encuentran disponibles en sus respectivos sitios web⁶. Podrá allí el lector revisar los temas, autores y abordajes de las diferentes publicaciones y así juzgar si detrás de una máscara de pensamiento crítico se esconde en realidad un oscuro dispositivo de alienación pergeñado por los directivos del Plan Bolonia.

Pero si el análisis de las publicaciones es el camino corto para identificar rasgos de una orientación política, el análisis de los conflictos que ocasiona son el atajo principal. Las orientaciones extensionistas que comentamos no han estado exentas de conflictos. Uno de los más resonantes ocurrió en junio de 2013, cuando el trabajo de Extensión Universitaria junto a organizaciones de trabajadores rurales del norte del país en el marco del programa “Centro de Formación Popular de

Bella Unión”, provocó la virulenta reacción del entonces presidente de ANCAP Raúl Sendic⁷. El gobernante percibió que los trabajadores fortalecían sus reivindicaciones y demandas con aportes de la investigación y la extensión universitaria, lo que generó su ofuscación. Curioso dispositivo amortiguador este que colabora con la potencia organizativa de los trabajadores rurales movilizados.

Para finalizar, se impone una última reflexión. Si en materia de crítica y búsqueda de alternativas al modelo “neodesarrollista-asistencialista” (o “posneoliberal-amortiguador” o como se lo defina) Extensión Universitaria no le ha ido en zaga a nadie, cabe preguntarse por qué razones Ferrer y Bolon insisten en una crítica que se evidencia de principio a fin carente de fundamentos. Aquí se vuelve ineludible considerar una razón de oportunidad: en la actual coyuntura universitaria el rectorado de Markarián procura desarticular la política extensionista que comentamos. Argumentos “por derecha” no le han faltado al rector para proceder al desmontaje. Pero se hacía necesario contar con argumentos “por izquierda”. Letristas de público cautivo, proveedores de sofismas para oportunistas y desprevenidos, Ferrer y Bolon acudieron comedidos a esta tarea. Al modo del banquero anarquista de Pessoa, hilaron argumentos para justificar una fenomenal impostura: la desarticulación de uno de los pocos espacios de la Universidad que trabaja con los sectores populares, ejerciendo el pensamiento crítico, investigando en torno a sus problemáticas, e interpelando a los modos dominantes de la ciencia, la docencia y la extensión. ¿Quiénes son los amortiguadores?

¹Publicado en la Revista “Prohibido Pensar”Nº 7, año II.

²Arthur Schopenhauer (2012) “El arte de tener siempre la razón. La dialéctica erística” José J. De Olañeta Editor, España.

³Stolowicz, Beatriz (2014) “El 'posneoliberalismo' y la reconfiguración del capitalismo en América Latina (2011)”, en: “Capitalismos de izquierda”, Revista de Ensayos Prohibido Pensar, Nº2, mayo-junio 2014 (pp. 18-19).

⁴Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República.

⁵CSEAM: Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República.

⁶Ver: <http://contrapunto.edu.uy/> y <http://www.extension.edu.uy/publicaciones/editorial>.

⁷Este episodio provocó que la CSEAM emitiera un comunicado público, que puede consultarse en: <http://www.extension.edu.uy/articulos/6323>